



De la pandemia y la gran
reclusión al asedio de las
sociedades subdesarrolladas

Isaac Enríquez Pérez

De la pandemia y la gran reclusión al asedio de las sociedades subdesarrolladas

Por Isaac Enríquez Pérez

Las sociedades subdesarrolladas son esas territorialidades que de manera más frontal y lacerante padecen los efectos negativos de la pandemia. En ellas, históricamente, se reproducen la desigualdad y las condiciones de exclusión social que magnifican los impactos de una *crisis epidemiológica global* que se amalgama con otros colapsos hasta conformar una crisis sistémica y *ecosocietal* que socava el proceso civilizatorio de las sociedades contemporáneas, erosiona la legitimidad de las instituciones e incide en la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie.

América Latina no está al margen de ello, sino que es una región que alcanzó cierto protagonismo en la irradiación de la pandemia a escala planetaria al erigirse como uno de los epicentros de la misma. No menos importante será el ejercicio del pensamiento anticipatorio que puntualiza en algunas tendencias y escenarios futuros respecto a los variados referentes empíricos que se abordan.

Si bien en el presente Working Paper de investigación se ofrece una visión de América Latina como una totalidad articulada, diferenciada y *sui generis*, se enfatiza en una sociedad subdesarrollada como la mexicana y se despliega un análisis respecto a la correlación de fuerzas que definen las decisiones estratégicas referidas a los problemas públicos. Particularmente, en el cuadro de enfermedades que se presentan como co-morbilidades y que acentúan el impacto del Covid-19; las condiciones de ancestral desigualdad que le dan forma a la pandemia y aceleran sus efectos; el estancamiento económico de las últimas décadas; la violencia criminal y el crimen organizado como poder fáctico; la aparente lucha intra-élite en torno a la disputa del espacio público y del Estado; los riesgos que impone la “comida chatarra o basura” (*junk food*) a la quebrantada salud de los mexicanos; y el sistema educativo y los niños y jóvenes como naufragos o víctimas de la pandemia.

A través de estos tópicos se ampliará la noción manejada en el libro *La gran reclusión y los vericuetos sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiversación semántica y escenarios prospectivos*, editado recientemente por el Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas, que postula a la pandemia como un hecho social total que se precipita como parte del colapso civilizatorio arraigado en la crisis del capitalismo y del sistema mundial que le es consustancial desde hace 200 años.

A través de esta referencia empírica al mundo subdesarrollado, se afianza la noción de que la pandemia no es un fenómeno estrictamente sanitario, sino que desborda los cauces estrictamente epidemiológicos para imbricarse con múltiples aristas de la vida social; con la lógica depredadora, desigual y excluyente de las estructuras de poder, dominación y riqueza; y con la cotidianidad de los ciudadanos.

La pandemia y la entronización de la desigualdad: América Latina y el camino hacia una nueva década perdida.

América Latina es la sociedad que a lo largo de su historia simboliza de manera más acabada la desigualdad que drena el sistema económico capitalista. Las múltiples crisis que se traslapan con la pandemia del Covid-19, profundizan esas asimetrías y postran a la región ante lo que ya se perfila como una *nueva década perdida*. Todo ello no está exento de las contradicciones e intereses facciosos propios de las élites y oligarquías, que más que un péndulo político lo que dibujan en la región es un laberinto político.

Al 30 de octubre de 2020, el hemisferio americano continúa como el epicentro de la pandemia con 20 377 717 contagiados confirmados y con 637 552 muertes atribuidas a la misma enfermedad del Covid-19. América Latina, por su parte, alcanzó en esta misma fecha 10 948 588 infectados por el nuevo coronavirus en tanto que las defunciones se elevaron a 393 780 (tres de cada diez muertes ocurren en la región y de esa cantidad, los tres primeros países más afectados son, en ese orden, Brasil, México y Perú). No solo es una pandemia fruto de la desigualdad y la pobreza sino que también lo es del desmantelamiento (por *privatización de facto y desinversión pública*) de los sistemas de salud y de la erosión sistemática del Estado, situaciones que en América Latina asumen rasgos inéditos con el advenimiento de la crisis económica y de desempleo más pronunciado de la historia.

Cabe aclarar que esta crisis económica no se incubó en la región con la pandemia, sino que se lastró desde principios de la segunda década del siglo XXI con la ralentización del crecimiento económico, el ensanchamiento de las brechas de la desigualdad social, el desvanecimiento de los mínimos de bienestar social promovidos por los gobiernos progresistas sudamericanos –especialmente las políticas de combate a la pobreza– y la re-primarización de los aparatos productivos y la dependencia de la exportación de materias primas, con el consecuente deterioro del medio natural.

Más aún, con la pandemia queda al descubierto –una vez más, aunque esta ocasión de manera lacerante– el hecho de que las estructuras de poder y riqueza no fueron trastocadas con la oleada de gobiernos progresistas en la región, sino que éstos apuntalaron los procesos de acumulación de capital y fungieron como un mecanismo contenedor del descontento popular y de los movimientos sociales de las décadas previas que se activaron con las estrategias ultra-liberales del *fundamentalismo de mercado*.

La crisis inmobiliaria / financiera del 2008-2009 incidió en la bonanza latinoamericana cosechada en los años previos. La caída en los precios internacionales de los *commodities* frenó de golpe el crecimiento económico de la región, de tal modo que entre el 2010 y el 2019 la tasa de crecimiento cayó del 6 al 0,2% anual. Mientras que la concentración del ingreso y de la riqueza es una constante que hacia el 2018 posiciona al quintil más pobre –el 20% de la población– de la región con sólo un 4% de la riqueza, en tanto que el quintil más rico acaparó el 56% de la riqueza regional, algo así como una proporción de catorce veces el ingreso adquirido por los más pobres entre los pobres. Con la pandemia del Covid-19, los 73 multimillonarios de la región se hicieron más ricos al aumentar sus fortunas en 48 200 millones de dólares (mdd) al tiempo que un nuevo rico se sumó a estas filas cada dos semanas desde el mes de marzo de 2020. 413 mdd es el monto acumulado diariamente por los acaudalados desde que arreció la crisis sanitaria en la región en marzo pasado (<https://bit.ly/3mCOadZ>).

Al persistir unos sistemas fiscales que otorgan privilegios y eximen de obligaciones tributarias a los patrimonios personales, las herencias y las ganancias empresariales, esas desigualdades seguirán latentes y profundizarán sus efectos. OXFAM calcula que a lo largo del 2020 estos sistemas tributarios dejarán de recabar en la región impuestos en el orden de los 113 400 mdd. De entrada, la recaudación tributaria alcanza en la región un 23,1% del PIB latinoamericano –muy por debajo del 34,3% que promedian los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estas diferencias, en buena parte, estriban en la evasión y elusión fiscal en América Latina, que alcanzan hasta el 6,1% del PIB.

La misma pandemia restregó en nuestras conciencias el hecho de que 140 millones de latinoamericanos ganan su sustento diario en la economía informal, un número que equivale al 55% de la Población Económicamente Activa. La fragilidad y precarización laboral de este amplio espectro de la población de la región hace que los impactos de la pandemia sean mayores por tratarse de sectores carentes de un salario fijo, de redes de seguridad social y de mínimas certidumbres laborales. Entonces, se calcula que 52 millones de nuevos pobres se sumarán en la región como consecuencia de los confinamientos. De ahí que se posible esbozar que la pandemia es *una fábrica global de pobreza*.

Los bolsones de migrantes latinoamericanos que deambulan en ciudades y países distintos a los suyos, en el contexto de la pandemia, no solo los expone al hambre sino también a la falta de acceso a los servicios sanitarios y a las transferencias monetarias. Presos de su condición indocumentada, los migrantes son los primeros náufragos del hiperdesempleo y de la pauperización social a la cual ingresan por partida doble (en su país de origen y en la sociedad receptora).

Las estimaciones más halagadoras alegan que el PIB de la región se contraerá, durante el año 2020, un 7,2% (<https://bit.ly/3f4luqX>) mientras otras estimaciones auguran una caída del 9,1%. La caída de la demanda externa – conjuntamente con la reducción de los precios de las materias primas– reducirá el potencial exportador de la región en productos como la soja, el cobre, el gas natural, el petróleo, la celulosa y –en el caso de México y algunas naciones centroamericanas– los bienes manufacturados. No menos importante será la reducción de los flujos turísticos hacia la región ante las restricciones de la movilidad. A la contracción del PIB se suman la caída del ingreso y del gasto de los hogares más la reducción de la inversión privada.

Esta contracción del PIB no solo agravará el desempleo (para octubre de 2020 la cifra alcanzó a 44 millones de latinoamericanos) y la pobreza (45 millones de habitantes engrosaron sus filas y 28 millones no logran cubrir sus necesidades básicas) en la región, sino que al combinarse con posibles rebrotes del coronavirus en las semanas y meses por venir, América Latina puede quedar colocada ante hambrunas y crisis humanitarias de amplias proporciones y difíciles de revertir en el corto y mediano plazos.

Si se llega a esos 230,9 millones de pobres latinoamericanos en el 2020, estaríamos hablando del 37,3% de la población de la región, en tanto que un 15,5% estará en la franja de la pobreza extrema.

El panorama se agrava con la reducción de la productividad, la baja recaudación fiscal, las movilizaciones sociales de finales de 2019 y la crisis de legitimidad y desconfianza que los ciudadanos le endilgan a sus gobiernos, pese al balón de oxígeno que representan los regímenes progresistas en naciones como Argentina, Bolivia, México y Venezuela.

Otro de los retrocesos se suscitará en el sistema educativo latinoamericano con la enseñanza telemática obligada por la pandemia. Una buena cantidad de niños y jóvenes desertarán de las escuelas y universidades ante la falta de condiciones para continuar su formación escolar. Ello, en sí, será una catástrofe civilizatoria y generacional para la región a medida que se obstaculice la formación de recursos humanos, se dilapiden recursos públicos y se inserten estos grupos etarios de manera prematura al campo laboral.

La otra crisis por venir en la región será la propia de los sistemas bancario/financieros. Con el hiperdesempleo y la caída de los ingresos familiares, la situación de insolvencia de los deudores -tarde o temprano- hará explotar a los bancos comerciales que otorgaron créditos al consumo en condiciones de laxitud e irresponsabilidad. Si bien las utilidades bancarias tendieron a disminuir en los últimos meses, ello no se compara con la sangría sufrida en la caída de los ingresos familiares. La pregunta que esta situación suscita estriba en quién o quienes asumirán los costes de esta crisis que en el mediano plazo comprometerá a las economías nacionales de la región. En otros momentos de la historia reciente los costes de estas bancarrotas los asumieron los Estados y los trasmutaron en deuda pública intergeneracional, como en el caso de México y su FOBAPROA-IPAB.

El desdoblamiento de las múltiples crisis que se aceleran con la pandemia en América Latina, obliga a pensar en un nuevo pacto social. Obliga a ir más allá del *Consenso de Washington*, del *Consenso Post-Washington* y del *consenso pandémico*. Reestructurar a los Estados latinoamericanos sobre bases sociales es solo una parte de los imperativos. El grueso del problema atraviesa por resolver el gran conflicto social zanjado con las estrategias de fundamentalismo de mercado adoptadas en los últimos cuarenta años y ello supone erosionar los privilegios entronizados con las políticas desnacionalizadoras, aperturistas y luego neo-extractivistas y re-primarizadoras del proceso económico.

Salir de estas crisis entrelazadas en la región implica ampliar la mirada y asumir que la pandemia no se reduce a una crisis sanitaria, que si bien algunos consideran que fue inesperada e imprevisible, no será transitoria ni efímera sino que sus efectos y consecuencias serán prolongados, de largo plazo y con implicaciones profundas en la vida social de la región.

Implica también redefinir las estructuras de poder, riqueza y dominación afianzadas durante las últimas cuatro décadas y ello supone ir más allá de la falsa disyuntiva de más mercado o más Estado. Implica pensar el *desarrollo con cabeza propia* para salir de los cánones establecidos y que históricamente asfixiaron a América Latina o la hundieron en laberintos de distinta índole.

Incentivar la recuperación económica es un primer paso necesario, pero no suficiente. Recuperar los empleos perdidos y crear otros nuevos, es un paso indispensable y para ello es fundamental canalizar a ese fin la inversión pública y renegociar las condiciones de la deuda para que este grillete sea condonado en el caso de aquellas naciones con economías frágiles. No sólo bastan políticas económicas expansivas y reformas fiscales progresivas, es imperativo ir más allá en un contexto crecientemente adverso signado por la lejanía de la recuperación económica y el deterioro de los principales indicadores de bienestar. Pero si ello omite asumir a la salud y al desarrollo como derechos humanos fundamentales, esos objetivos estratégicos serán en vano. De ahí la importancia de una sociedad latinoamericana organizada, activa y en movimiento que atempere y revierta la tiranía del mercado y del Estado.

Las otras epidemias mexicanas agravadas con la instauración del coronavirus

Pese a que son encubiertas con la *construcción mediática del coronavirus* y el manejo faccioso de la pandemia, los problemas de salud pública relacionados con los hábitos y estilos de vida, la desigualdad y la pobreza, el estancamiento económico, la violencia criminal y la confrontación facciosa intra-élite, son las otras epidemias que asedian, ya históricamente, a una sociedad subdesarrollada como la mexicana. La pandemia -hay que decirlo, aunque parezca una obviedad- no generó estos flagelos, sino que los puso al desnudo tras exacerbar sus manifestaciones y ampliar las brechas preexistentes.

a) En México, múltiples son las enfermedades que, a manera de comorbilidades, caminan a la par del Covid-19 y que tienden a debilitar en extremo el sistema inmunitario del organismo humano y a exponerlo a una mayor letalidad tras ser atacados por el SARS-CoV-2. Históricamente desatendidas por el sector público e incentivadas por un patrón de consumo fundamentado en la llamada *junk food* ("comida basura o chatarra"), estos padecimientos -silenciados e invisibilizados por la industria de los alimentos ultraprocesados y la agroindustria- multiplican los impactos del nuevo coronavirus.

Hacia el año 2018, el INEGI estimó que en México 20,7 millones de habitantes padecen diabetes. De ese total, alrededor de 12 millones padecen la enfermedad y no están enterados de ello en tanto que 8,7 millones (algo así como el 10,3% de la población adulta) tienen el diagnóstico y siguen algún tratamiento. Sólo adelantada por las enfermedades cardíacas (24%), la diabetes mellitus (14%) es la segunda causa de muerte en el país. En tanto que el 75,2% de los adultos mayores de 20 años padecen sobrepeso y obesidad (el 35,6% de los niños entre 5 y 11 años y el 38,4% de adolescentes entre 12 y 19 años las padecen). Ambos padecimientos se relacionan directamente con las dos enfermedades crónicas mencionadas. Por su parte, hacia el 2017 enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial son padecidas por 17 millones de habitantes. Para el 2017, se sumaron 147 985 nuevos casos de cáncer y mueren al año 14 de cada 100 mexicanos.

Sin duda, estas estadísticas posicionan a México en una crisis sanitaria de grandes magnitudes que puede amplificarse –en un contexto de constante austeridad presupuestaria en términos reales ejercida durante las últimas décadas– con la incidencia del Covid-19. Se trata de *silenciosas epidemias* –aquí sí manejado el término en su sentido estrictamente sanitario– que no son tomadas como tales por los sistemas de salud público y privado al no incentivarse la medicina preventiva y la especialidad de la medicina familiar y comunitaria.

Cabe mencionar que el pronóstico del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington (IHME, por sus siglas en inglés) augura para México, hacia noviembre y diciembre de 2020, entre 140 mil y 153 mil 189 muertes –respectivamente– por Covid-19, en caso de relajarse las medidas preventivas (<https://bit.ly/2PDKzxJ>).

b) La ancestral desigualdad que corroe a la sociedad mexicana marcha a la par –durante las últimas décadas– del estancamiento estabilizador que hace del crecimiento económico un espectro cada vez más extraviado en el horizonte de las políticas públicas. No solo no crece la economía mexicana sino que los salarios se mantienen deprimidos en tanto que las grandes fortunas se mantienen intactas e, incluso, se expanden vertiginosamente. No menos importante es el hecho de que las mismas políticas sociales del “combate a la pobreza” rinden frutos exigüos ante la entronización de la persistencia de la desigualdad extrema.

Hacia el 2015, vivían en situación de pobreza alrededor de 53,3 millones de habitantes. Pero ello contrasta con la riqueza de un selecto grupo de mexicanos cuyas fortunas crecieron cinco veces durante las últimas décadas.

Con el *confinamiento global*, se pronostica que este número de pobres puede pasar de 52,4 a 73,4 millones de personas (algo así como el 57% de la población nacional (<https://bit.ly/30CXhTH>)).

Creció el ingreso per cápita entre 1995 y el año 2010, pero persistió la pobreza, mientras el crecimiento económico –cuando existió– concentró sus beneficios distributivos en las clases sociales ricas. El 1% más acaudalado concentra el 21% del ingreso del país (según datos de Campos, Esquivel y Chávez; <https://bit.ly/31wIYR3>). Por su parte, el Global Wealth Report indica que el 10% más rico concentra el 64,4% de la riqueza nacional (<https://bit.ly/2XGY5F4>). En concreto, para el 2015, eran 16 multimillonarios los que concentraban 142 900 millones de dólares (en 1996 ese monto era de 25 600 millones dólares) y sólo cuatro de ellos concentraban el 9% del PIB (en el 2002 concentraban el 2%) (<https://bit.ly/3fHHLKq>). Aunque las 33 primeras fortunas experimentaron, con el confinamiento, pérdidas por 35 000 millones de dólares (<https://bit.ly/2XJdtAX>) sus mermas no se comparan, proporcionalmente, con los 12 millones de mexicanos que fueron enviados a casa, sin goce de sueldo, entre abril y julio del presente año, bajo la consigna de “cuidar su salud”.

Esta élite plutocrática mexicana se rigió durante las últimas décadas por una captura del Estado mexicano tras beneficiarse de la ausencia de regulaciones sólidas del proceso económico y de exenciones y condonaciones fiscales. En lo que serían amplias redes de corrupción, impunidad y evasión fiscal desplegadas en torno al espacio público.

c) El estancamiento económico no es exclusivo del comportamiento de los indicadores macroeconómicos de los últimos años, sino que se extiende a la década de los ochenta con la misma instauración de las políticas económicas regidas por el *fundamentalismo de mercado*. Las estrategias contraccionistas privilegiaron la disciplina fiscal y la estabilización de las principales variables macroeconómicas para afianzar la apertura comercial y la inserción de México en la economía norteamericana. La inducida recesión económica actual se relaciona con la fuga de capitales y la migración de las inversiones productivas hacia las arcas de los bancos estadounidenses y hacia los paraísos fiscales. Alrededor de 76 mil 166 millones de dólares emprendieron esa marcha desde el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador.

Con la pandemia, el INEGI anunció a finales de julio (<https://bit.ly/3kuXDnw>) que la caída de la economía fue del 18,9% a lo largo del segundo trimestre de 2020, significando un retroceso de diez años.

Del estancamiento se transitó, abruptamente, a una situación de *colapso económico* en el contexto de *la gran reclusión*, la retracción de la demanda y el consumo y la ruptura de las cadenas globales de producción y suministro.

Esas reticencias del sector empresarial se unen a la incapacidad del actual gobierno para adoptar una política expansiva capaz de detonar el crecimiento económico y suelte las ataduras dogmáticas de la disciplina fiscal. De ahí que la recuperación económica se perfila cuesta arriba ante la retracción y empequeñecimiento del Estado en el proceso económico. Sólo una política de re-industrialización y de construcción de infraestructura básica, ambas intensivas en mano de obra, lograría revertir la magnitud de este *colapso económico*.

Estos datos son una muestra de que la pandemia vino a postergar los efectos de un modelo económico que no privilegia el crecimiento económico, sino la estabilización de las variables macroeconómicas y la inserción subordinada y dependiente de México a los circuitos de la economía internacional.

d) La violencia criminal es otra de las epidemias mexicanas que no cesa y que es parte de las luchas entre distintas facciones de las élites políticas y empresariales. Con 35 588 homicidios dolosos, 2019 fue catalogado como el año más violento desde que se tienen registros. Esta violencia no es fortuita o casual, ni exclusivamente decidida y emprendida por los ejércitos de criminales sino que se explica por las aparentes luchas intra-élite y la reconfiguración de los poderes y mercados en torno al crimen organizado. Durante el primer semestre de 2020, fueron asesinadas 17 982 personas. Y con ello gana la partida la noción de legalizar la militarización de la seguridad pública y la referida a no desmontar la *economía clandestina de la muerte* instaurada en el país desde hace tres décadas.

La violencia criminal y las muertes que le son consustanciales no solo representan, en materia de salud pública, una crisis epidémica por la gran cantidad de muertes que –sobre todo– afectan a la población joven, pobre y carente de formación escolar sino que es también un flagelo social que trastoca la vida de la sociedad mexicana, reconfigura los territorios, acentúa la *crisis de Estado* y coloca a los recursos naturales como el principal botín de las disputas en el marco de procesos de acumulación por desposesión y despojo más amplios.

Esto es, el confinamiento no frenó la violencia criminal sino que la exacerbó en el contexto de la disputa por los territorios, los recursos naturales y la apropiación de mercados ilegales.

e) La confrontación facciosa intra-élite, más allá de tratarse de una polarización dada por intereses creados, es –en esencia– una disputa ideológica que se dirime entre la clase media acomodada y supuestamente ilustrada, que apuesta a sembrar el odio racista y clasista y la discordia entre la clase media/baja para afianzar una falsa lealtad en torno a un “enemigo imaginario” dado por las capas pobres de la población.

Los intereses creados de la oligarquía beneficiaria de las políticas de ajuste y cambio estructural no están en entredicho con el actual gobierno. No es trastocado el patrón de acumulación rentista, extractivista y depredador – pese a la nueva correlación de fuerzas– pero sí desbalancea a segmentos conservadores de esta élite plutocrática la posibilidad de que sus privilegios fiscales sean erosionados o, en su caso, erradicados.

Llama la atención que, en el contexto de la pandemia, se acelere la implosión y crecimiento de grupos y organizaciones reaccionarias de extrema derecha que asumen al actual gobierno como un enemigo a vencer. El autodenominado Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAA) se erige en una organización que pretende nuclear –a partir de un discurso incendiario, clasista, racista, misógino y contradictorio– a amplios segmentos ultraconservadores de la población que albergan un descontento más repulsivo que razonado. Grupos reaccionarios con ese perfil –heterogéneos en esencia– no solo coinciden con su crecimiento en Estados Unidos, Europa y regiones como la latinoamericana, de cara a la insatisfacción y el malestar generalizado entre la población, sino que –en el caso de México– copa con efectividad espacios públicos como el ofrecido por las redes sociodigitales. La crisis de representación del sistema de partidos explica, en parte, fenómenos como el del llamado FRENAA tras la cancelación de mecanismos de intermediación reales entre el Estado y las necesidades ciudadanas.

Autodenominado como supuesta organización ciudadana, el FRENAA tiene como único fin la defenestración del gobierno del López Obrador. Y para ello recurre al acceso a los medios masivos de difusión, impulsa efímeras protestas en las calles y promueve mecanismos jurídicos para generar presión. Uno de sus objetivos consiste en incentivar a ciertos sectores de las fuerzas armadas para que muerdan el anzuelo de la posibilidad de un golpe de Estado. Ello se evidencia, también, en su apoyo al golpe de Estado en Bolivia a finales de 2019 y a una posible intervención militar en Venezuela. Sin fundamento, acusan –como en la época del macartismo revanchista– de comunista y socialista al actual gobierno y con ello irradian su odio hacia los sectores empobrecidos y favorecidos, mínimamente, con las políticas sociales redistributivas.

No sólo es alarmante el retorno de estos fundamentalismos ideológicos, sino que –en el mismo contexto de la pandemia– pretenden posicionarse ante cualquier resquicio de titubeo y fallo por parte de las élites políticas que actualmente gobiernan. Lo decíamos: no es una lucha por intereses creados que pongan en predicamento la extrema concentración de la riqueza y el patrón de acumulación rentista, extractivista y depredador. Es una lucha, en esencia, ideológica que fragmenta y segmenta a la población a partir –sin mediar reflexión– del incentivo del odio y las pulsiones más profundas de los ciudadanos.

A grandes rasgos, estas otras epidemias mexicanas se entrecruzan y radicalizan con la *crisis epidemiológica global* y con las *oleadas desinformativas* que incentivan el miedo y el control sobre la intimidad, la mente y los cuerpos. Ocultas bajo el manto mediático de la pandemia como monotema, están allí, lacerando la vida de millones de mexicanos y eclipsando sus posibilidades de mínimo bienestar social. Solo la información veraz que contribuya a la formación de las culturas ciudadanas hará que la población tome conciencia de la magnitud de estos problemas públicos, por demás interesadamente invisibilizados, silenciados, encubiertos y ocultos en el maremágnum mediático de la pandemia.

La pandemia a la mexicana y la caída del crecimiento económico: la obstinación por el estancamiento estabilizador.

La *esclerosis y debilidad del Estado* mexicano es evidenciada –entre otras cosas– por su incapacidad para conducir el crecimiento económico y para estimularlo con los mecanismos de política económica apropiados. Con la instauración de la pandemia, esta tendencia histórica se radicaliza y afloran escenarios económicos inciertos y nada halagüeños para el curso mismo del desarrollo nacional. Con el actual gobierno federal no sólo persiste el modelo económico aperturista, desnacionalizador y desindustrializador sino que son perpetuados el *estancamiento estabilizador* y la misma incapacidad para pensar el desarrollo con cabeza propia.

El 30 de julio pasado, el INEGI presentó una estimación respecto al comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB). En dicha estimación oportuna se aprecia una caída del 17,3% en términos reales durante el trimestre comprendido entre abril y junio de 2020 en tanto que expone una caída de 18,9% respecto al mismo trimestre del año 2019.

Por actividades económicas que componen el PIB, la principal caída la experimentaron las actividades secundarias o industriales con un 23,6%; por su parte, el sector servicios se precipitó en un 14,5% y el sector agropecuario cayó un 2,5% a lo largo de ese segundo trimestre de 2020 respecto al trimestre transcurrido entre enero y marzo del presente año (<https://bit.ly/3kuXDnw>).

Si bien estos datos representan un batacazo de enormes magnitudes para el comportamiento de la economía mexicana, cabe contextualizarlos en el escenario que a nivel internacional se presenta al calor de los impactos diferenciados que acompañan a la pandemia y al confinamiento global. El Banco Mundial, por su parte, conservadoramente augura en sus proyecciones una caída de la economía mundial del 5,2% para el 2020 siendo este dato del 7,0% para el caso de las economías avanzadas, en tanto que para América Latina y el Caribe la caída sería del 7,2% (<https://bit.ly/3f4luqX>).

Se trata de un escenario mundial adverso que se explica por *la inducida gran reclusión* y por las decisiones y medidas tomadas desde los gobiernos y los grandes corporativos en torno al frenón de las principales actividades económicas, la ruptura de las cadenas globales de valor y suministro, y la retracción de la demanda y el consumo masivo como parte del confinamiento y la crisis de hiper-desempleo profundizada durante los últimos meses.

Aunque existe este contexto dado por el comportamiento y contradicciones de la economía mundial en la era *pandémica*, lo suscitado en México se relaciona también con múltiples factores que inciden en la desaceleración de la actividad económica y en la caída abrupta del crecimiento económico. En algún momento señalamos las reticencias mostradas por la clase empresarial mexicana para invertir en actividades productivas desde la elección del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en lo que sería una falsa confrontación entre élites políticas y empresariales que, al menos en el discurso y en ciertas prácticas se muestran como diferentes. Decimos que es falsa esta supuesta confrontación porque el actual gobierno federal no compromete los cimientos del patrón de acumulación rentista y extractivista imperante en México.

A lo anterior se suma la fuga de capitales dada por el aumento de depósitos de empresarios mexicanos en bancos estadounidenses. Entre julio de 2018 y el mes de enero de 2020, se registró una fuga de capitales por un monto de 76 mil 166 millones de dólares (<https://bit.ly/32WSah8>); lo cual explica, en gran medida, los riesgos de recesión sobre la economía mexicana desde entonces.

Declarada la pandemia, este fenómeno se aceleró como parte de las expectativas negativas que genera la economía mexicana, la ausencia de certidumbre (lo cual es una infundada percepción de la clase empresarial), y la misma depreciación del tipo de cambio entre el peso y el dólar estadounidense. De ahí que las élites empresariales y los grandes ahorradores prefieran tener sus depósitos en dólares y no en pesos mexicanos. Tan sólo los inversionistas de origen estadounidense, vendieron entre enero y abril de 2020, el 16% de los bonos gubernamentales mexicanos, representando una suma de 15 mil millones de dólares (<https://bit.ly/3i4OGzk>). La espiral no se detiene con el cenit de la pandemia y se registra que entre abril y junio del presente año, México se expuso a una fuga masiva de capitales por montos de 8 710 millones de dólares (<https://bit.ly/3h4wvZw>).

El imperativo de la austeridad fiscal privilegiado por el actual gobierno, en el marco de la perpetuación de la política económica ultra-liberal, contribuye a agravar y profundizar el adverso panorama macroeconómico de la nación azteca. No menos importante es el disparo del resorte del desempleo en el país durante los meses de la pandemia. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la pérdida de 1,2 millones de puestos de trabajo formales hacia la primera quincena de agosto del presente año (<https://bit.ly/3IXoA3A>). Si se incluye a la población que labora en condiciones de informalidad, el número de desempleados ascendía –para la tercera semana de julio– a los 15,7 millones de habitantes (13,6 millones de personas no ocupadas y el resto serían los pertenecientes a la llamada población económicamente activa desocupada) (<https://bit.ly/32Zt7tL>). Con esta situación de hiper-desempleo masivo, la economía mexicana enfrenta un shock de la demanda al retraerse el consumo de la clase trabajadora.

Estas tendencias se complican con la persistencia de una política monetaria estipulada por el banco central que continúa apostando por la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos. Al respecto, el Banco de México declara oficialmente en su sitio de Internet, que su “objetivo prioritario es mantener una inflación baja y estable”. De ahí su distancia respecto a la procuración del pleno empleo en lo que sería la entronización de una falsa disyuntiva en materia de política monetaria y que, incluso, marcha a contracorriente de la misma Reserva Federal de los Estados Unidos que, ante la pandemia, reivindica la simbiosis de la estabilidad de precios con el pleno empleo, siendo este último el objetivo principal de ese banco central. Mientras en México se observan ambos objetivos como mutuamente excluyentes –subordinando el crecimiento económico a la estabilidad macroeconómica– la tendencia en múltiples bancos centrales del mundo se dirige a considerarlos como complementarios.

A la par de las restricciones que impone la losa asfixiante de la disciplina fiscal, en México prevalece un *Estado pobre y fiscalmente débil* que no se atreve a estipular una reforma fiscal progresiva que grave a los ciudadanos que más ganan y que cuentan con fortunas y grandes herencias. Y no se atreve porque históricamente las élites empresariales fueron parte de las clientelas que sostenían la legitimidad del poder político y porque las élites políticas temen la furibunda reacción de las oligarquías que controlan los medios masivos de difusión y una infinidad de poderes fácticos.

La reforma fiscal no sólo es necesaria en el contexto de la pandemia, sino urgente de cara al colapso económico que vive el país. No basta con las obras faraónicas que promueve el actual gobierno federal (el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas), sino que es impostergable financiar un ambicioso programa de infraestructura intensivo en mano de obra que tenga una irradiación multi-regional y amplios impactos territoriales y diferenciados según los niveles de desarrollo económico de cada entidad federativa.

Ante el advenimiento de una crisis económica de grandes magnitudes como no se experimentaba en México desde 1932, la urgencia de una reforma fiscal no sólo es un imperativo técnico sino de justicia social, considerando que los naufragos de la pandemia y de dicha crisis lo serán la clase trabajadora y los sectores de la población expuestos a la exclusión social y a la pauperización. El mismo discurso anti-corrupción y la llamada “austeridad republicana” no bastan para procurar un ahorro en el sector público (en el segundo informe de gobierno se señaló un ahorro de 560 mil millones de pesos). Agotado el mismo potencial exportador de la industria petrolera y alicaídos los precios internacionales de los hidrocarburos, es pertinente echar mano de los recursos provenientes del freno impuesto a la evasión fiscal que benefició por décadas a los grandes corporativos empresariales, así como de una reforma fiscal que no sólo grave a los consumidores cautivos a través del I.V.A. y a la actividad productiva de las empresas –que, en última instancia, transferirán dicha carga fiscal al consumidor final–, sino que privilegie el gravamen sobre el ingreso del decil más alto y, especialmente, sobre el 1% que concentra mayor riqueza y grandes fortunas.

Ante una caída del 10% pronosticada para el 2020 (en tanto que para el 2021 se augura un crecimiento del 2,95%), México no cuenta con suficientes márgenes de maniobra mientras la política económica se empecine en el precepto de la austeridad fiscal y no se apueste por un proceso de re-industrialización y de soberanización en torno a las decisiones económicas estratégicas.

No sólo continuará la mayor exposición respecto a los vaivenes de los mercados de América del Norte, el flujo de divisas enviadas por los migrantes, y la dependencia comercial y tecnológica respecto a los Estados Unidos, sino que estos condicionamientos adversos crearán mayores ataduras.

El círculo vicioso puede presentarse al no crecer la economía nacional y al restringirse con ello la provisión de recursos fiscales hacia las arcas del Estado. Agotado el veneno de *la economía fosilizada*, pocos son los márgenes de maniobra de la hacienda pública para el incremento de sus ingresos si no se echa mano de una amplia reforma fiscal progresiva.

El actual mandatario aún cuenta con un margen amplio de legitimidad social para emprender una reforma fiscal que grave al que más tiene. Más aún, cuenta a su favor con el respaldo técnico dado por su estrategia orientada a evitar un mayor endeudamiento del sector público al tiempo que logra controlar favorablemente el gasto público y cumple con las metas fiscales. El resto del esfuerzo se concentraría en la capacidad de los operadores políticos en aras de persuadir a la oligarquía y a las élites empresariales para que no sólo paguen sus adeudos fiscales, sino para que se sumen a un *gran pacto nacional* que priorice salir del atolladero de las últimas décadas y campear el vendaval desatado por la crisis pandémica. Sin la llama de esa mínima posibilidad, México corre el riesgo de perpetuar sus condiciones de subdesarrollo y salir de la vorágine de la *crisis epidemiológica global* será una labor cuesta arriba.

Educación, niños y jóvenes como náufragos de la pandemia.

Entre los principales náufragos de la pandemia destacan los niños y jóvenes despojados del espacio público que les brinda la escuela y la educación como mecanismos de socialización, movilidad social y construcción de ciudadanía.

Con el confinamiento global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que más de 1600 millones de estudiantes fueron afectados por la parálisis y cierre temporal de las escuelas en más de 160 países (<https://bit.ly/2Y6NymV>). 40 millones de niños en edad preescolar son privados, con la pandemia, de cursar su primer año en ese nivel educativo (<https://bit.ly/3g05zcW>). En tanto que, se calcula, como mínimo, alrededor de 24 millones de niños y jóvenes que podrían abandonar definitivamente su enseñanza a raíz de los impactos de la crisis económica que se cierne.

Ante esta situación, António Guterres, Secretario General de este organismo internacional, acusa que con ello se perfila “una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas” (<https://bit.ly/3iQ73Z7>).

A ello se suma el rezago –previo a la pandemia– de 250 millones de niños en edad escolar que vivían excluidos de la alfabetización y de la escolarización. Lo cual, en sí, es una crisis social de grandes magnitudes que se relaciona con los procesos de *desigualdad extrema global* y con los múltiples mecanismos de exclusión social que se territorializan de manera diferenciada entre las naciones.

Con *la gran reclusión*, los niños y jóvenes no solo son privados de un espacio físico como la escuela sino del andamiaje institucional y simbólico que les permite participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje y en la construcción de imaginarios y significaciones para representar el mundo y la realidad que les circunda. Es la educación –tras la familia– el principal mecanismo de socialización y de cultivo de las relaciones cara a cara de infantes y adolescentes que hoy día son relegados, sin alternativa, al ámbito de la privacidad y el anonimato. Imponiéndose con ello la atomización, la resignación, el social-conformismo y la postración de la imaginación.

Ante el riesgo pandémico, desde el mes de marzo ganó terreno el proceso de formación en el *Internet Way of Life*. Pero este sistema de educación a distancia obvia las necesidades materiales y emocionales específicas de niños y jóvenes. A la ansiedad, estrés y angustia que, por sí mismo, supone el inducido encierro de los últimos meses, se suma la soledad y desconcierto de este grupo etario de cara al proceso de enseñanza/aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. A ello se agrega también la mayor exposición de estos niños y jóvenes a la televisión y a sus oleadas publicitarias y propagandísticas que inundan con noticias falsas carentes de contenido didáctico y que enfatizan en un entorno negativo y en la entronización de un estilo de vida que estimula evasiones y adicciones como la *junk food* (“comida basura” o “comida chatarra”) y que los expone al debilitamiento del sistema inmunitario y a morbilidades como la obesidad y la diabetes.

Es en las sociedades subdesarrolladas donde se expresan de manera más radical los impactos de la pandemia y del confinamiento global. Particularmente, la brecha digital exacerba los tradicionales mecanismos de exclusión que prevalecen en los sistemas educativos nacionales, en lo que viene a conformar una era de la desconexión con 346 millones de niños y jóvenes (29% del total) sin acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (dato proporcionado por una UNICEF para el año 2017; <https://bit.ly/2Y2J7te>).

La sociedad paradójica que vivimos es inédita por la vorágine de innovaciones tecnológicas pero también por la creciente exclusión en torno al uso y disfrute de las mismas. Y ello marcha a la par de la propia ignorancia tecnologizada que supone, para aquellos ciudadanos que tienen las posibilidades materiales, acceder a la era de la información pero no usar sus dispositivos para cultivar el proceso de enseñanza/aprendizaje y la formación de la cultura ciudadana.

México no está al margen de esos comportamientos y tendencias mundiales. Con un sistema educativo preñado de variados rezagos, centralista y culturalmente homogéneo por antonomasia, capturado por múltiples intereses creados que subordinan la formación a lo faccioso, no sólo enfrenta la insuficiencia de inversión pública (se destina 4,3% del PIB nacional y el 17% del presupuesto federal) en varios rubros como la infraestructura (escuelas rurales sin sanitarios ni energía eléctrica; escuelas radicadas en regiones calurosas sin aire acondicionado; escuelas urbanas y rurales aún dañadas por los efectos de sismos de años pasados), el material educativo y la capacitación de los docentes de niveles básicos, sino que persisten en él limitaciones pedagógicas y didácticas que posicionan al país en los peldaños más bajos de las evaluaciones entre países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hacia el año 2018, según estudios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), alrededor del 85,6% del gasto público destinado a educación es absorbido por el pago de nóminas; pero, agregamos, ello desprotege la inversión en la llamada formación inicial del docente y en el uso efectivo de tecnologías de la información y la comunicación.

Cabe apuntar que con la pandemia y los confinamientos, en el país azteca se suscitó un fenómeno de deserción escolar masiva por diferentes causas, tras la experiencia del programa oficial “Aprende en casa”, con el cual se intentó finalizar –desde el mes de marzo– el ciclo escolar 2019-2020. Funcionarios del gobierno federal indican que alrededor de 800 mil adolescentes entre los 15 y los 17 años y que cursaban el tercer grado de su formación secundaria, no podrán continuar su formación de bachillerato (<https://bit.ly/2PVjHtf>). En ello incide el desinterés en su propia formación, pero también la necesidad impuesta por la crisis económica de contribuir al ingreso familiar a través de su trabajo. En el nivel de educación superior (licenciatura y posgrado) se calcula una deserción de 593 mil jóvenes (de un total de 4 millones 538 mil matriculados). Para el nivel básico (pre-escolar y primaria) y medio básico (secundaria), se calcula que 2,5 millones de niños y jóvenes (el 10% del total inscritos) abandonarán la escuela definitivamente en medio de la pandemia (<https://bit.ly/3avETiM>).

Cabe mencionar también que en el ámbito de la educación privada –que atendía a 5,5 millones de estudiantes– con la pandemia se vieron obligadas a cerrar el 30% de las escuelas al tiempo que se proyecta una reducción del 35% en sus matriculas dentro de los niveles básico, medio básico y medio superior (<https://bit.ly/311rHPL>).

Esta deserción escolar tendrá impactos en la desigualdad de género y en problemas de salud pública como la nutrición y los embarazos no deseados. En este último rubro, el Consejo Nacional de Población proyecta que con la pandemia existirán alrededor de 171 mil embarazos no deseados más entre mujeres de 15 y 34 años de edad y de ese total, 35 mil 813 embarazos corresponden a adolescentes en el rango de edad de los 15 a los 19 años (<https://bit.ly/2YajA1r>), que se suman a los 390 mil 89 mujeres entre 9 y 19 años que fueron madres en años previos. Es muy probable que exista una correlación entre este fenómeno y la deserción escolar de los últimos meses.

Ante estos antecedentes mínimos, el pasado 3 de agosto de 2020 la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el inicio del ciclo escolar en los niveles básico, medio básico y medio superior para el día 24 del mismo mes. Oficialmente, se apela a las posibilidades que abre la difusión de contenidos educativos a través de la televisión y la radio.

Al 15 de agosto (fecha en que se oficializó la nueva opción educativa) se registraron en México 511 269 casos de contagio por Covid-19 y 55 908 muertes a causa de esta enfermedad, cifras aceleradas por la presencia de co-morbilidades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Y con una proyección, hacia noviembre y diciembre, de entre 140 mil y 153 mil 189 muertes –respectivamente– por el nuevo coronavirus, en caso de relajarse las medidas preventivas (<https://bit.ly/2PDKzxJ>) son –en realidad– pocas las opciones reales con que cuenta el país para continuar con el despliegue del proceso de enseñanza/aprendizaje entre los grupos etarios en cuestión.

Aunado ello a la brecha digital ahondada con la pandemia, pensar en una comunicación sincrónica a través de la Internet entre el sistema educativo, los docentes y los estudiantes, resultaría una opción inviable y hasta imposible. Quienes padecen la pobreza extrema, sea en el medio rural o en las urbes, no sólo son víctimas de este flagelo social, sino que están al margen del teletrabajo, la educación a distancia, el comercio electrónico y del entretenimiento en línea. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, levantada por el INEGI, indica que solo 23,4% de los hogares rurales cuenta con acceso al Internet; en tanto que en el medio urbano es el 65,5% de los hogares los que cuenta con conexión a esta tecnología.

A su vez, sólo el 45% de la población que ocupa el estrato económico bajo es usuaria de internet (en contraste con el 92% en los estratos económicos altos). Y aun cuando la población pobre cuenta con algún ordenador en sus hogares, no accesan al Internet por carencia de ingresos y porque en su localidad no se provee la conexión.

La televisión y la radio cuentan con una cobertura e impacto masivos en el país (32,2 millones de hogares poseen el primer aparato, algo así como el 92,9% del total) y se presenta -mucho más que la Internet- como una opción viable para hacer llegar contenidos educativos a los estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, surgen varios inconvenientes, a saber:

a) La televisión y la radio no son sustitutos del proceso de enseñanza/aprendizaje que precisa de la relación cara a cara y de todo el proceso de socialización que le circunda. No sustituyen al docente ni al ejercicio y adopción de metodologías pedagógicas y didácticas porque, en esencia, se trata de una comunicación unidireccional donde el estudiante es un simple receptor pasivo de contenidos.

b) Si no existe un encauzamiento dado por el docente y los padres de familia, se corre el riesgo de que estos medios masivos cumplan más una función de entretenimiento y -bajo el supuesto de que los niños y jóvenes no pierdan el tiempo- de falso confort, que de fuente de aprendizaje real y de asimilación de nuevos conocimientos. Entonces se abriría la posibilidad de que sólo sean asumidos los contenidos como una opción para “tener ocupados a los niños y jóvenes” mientras los padres de familia se descargan de su responsabilidad en el proceso educativo.

c) A primera vista, parece ser que no será aprovechado el potencial del magisterio y la experiencia adquirida por este gremio entre marzo y julio del presente año durante las distintas fases del programa “Aprende en casa”. Entonces, será la televisión la que llevará la voz cantante en la transmisión de contenidos educativos y aunque ello garantiza un alcance y cobertura masivos, no asegura en lo más mínimo -por sí misma- un aprendizaje sustancioso, corriéndose el riesgo de nulificarse sus efectos. Entonces, se diluye toda posibilidad de mediación pedagógica entre los conocimientos emitidos y el sujeto que aprende, pero que es reducido a receptor pasivo de contenidos unidireccionales.

d) Se le otorga centralidad a la televisión en el proceso de enseñanza/aprendizaje cuando su papel sería el de erigirse en un instrumento o herramienta de cobertura masiva, en un vehículo que acerque a conocimientos generales, pero que no reemplaza la relación humana que supone la formación escolar, ni atiende las especificidades y necesidades de las comunidades locales.

e) Como no existirá proceso de enseñanza/aprendizaje en estos meses de educación a través de las pantallas de televisión, el pensamiento crítico será lapidado y desterrado de toda acción orientada a la formación escolar. Lo que se presentará será un ejercicio de difusión unilateral de información que no incentiva el ejercicio del razonamiento y de juicio fundamentado.

f) Para adoptar este programa de educación a distancia y de transmisión de contenidos escolares a través de la televisión, ese mismo día del anuncio se firmó un Acuerdo Nacional por la Educación entre el gobierno federal y cuatro emporios privados de la comunicación masiva (Televisa, Tv Azteca, Imagen y Grupo Multimedios). Un acuerdo que les reportará –en un proceso de transferencia de riqueza pública a manos privadas– 450 millones de pesos (alrededor de 22,5 millones de dólares al tipo de cambio de la fecha), lo cual no sólo incrementa el precio de sus acciones en los mercados de valores (Televisa tuvo, tras la firma del Acuerdo, un incremento bursátil del 15% y Tv Azteca del 18%. Véase <https://bit.ly/3126aGO>), sino que las posiciona –a través del ejercicio de su capitalismo filantrópico– como entidades protagónicas en la agenda educativa nacional y les brinda respiración artificial ante la retracción y agonía –durante los últimos años– de este negocio privado (<https://bit.ly/3g1k6oL>) y la emergencia de otras opciones de entretenimiento para la población. Con más de 30 millones de estudiantes, un millón y medio de docentes y varios millones de padres de familia atentos al televisor, estos consorcios conformarán una nueva audiencia cautiva para sus contenidos.

En ello, los riesgos son evidentes: los propietarios de las concesiones de estos medios no solo son los hombres más ricos del país sino que son los líderes de las campañas de desinformación y *tergiversación semántica* a que está sometida diariamente la población. Entonces, la comunicación será directamente entre estos mass media privados y los estudiantes reducidos a receptores pasivos, en el marco de prácticas verticales y unidireccionales sin mínima mediación pedagógica y didáctica. En suma, evidencia la claudicación del Estado en el esfuerzo de transmitir contenidos educativos desde las concesiones públicas y los tiempos públicos oficiales, así como la entronización de la racionalidad tecnocrática en la gestión de la educación como bien público.

Como lo analizamos en otro espacio, la universidad enfrenta serios desafíos con la pandemia y ello se extiende a los procesos de enseñanza/aprendizaje suscitados en los niveles básicos de la formación escolar. Justo en la educación primaria y secundaria se precisa del retorno a lo local para evitar reproducir esquemas unilaterales, unidireccionales y centralizados de gestión educativa.

La escuela sólo será rescatada desde esa escala territorial y desde la participación activa de autoridades educativas, docentes, padres de familia y estudiantes, si existe una oposición a modelos pedagógicos verticales, uniformes y homogéneos creados desde el escritorio y sin referencia a las necesidades específicas de los niños, jóvenes y comunidades. México es un país culturalmente megadiverso en sus regiones y sitiado por problemas públicos multifactoriales y de distinta índole. Ello exige el despliegue de la imaginación creadora por parte de los docentes, más que su papel de simples apéndices de la televisión y de vigilantes de las instrucciones recibidas por los estudiantes a través de la pantalla.

Se trata de ir a contracorriente de la verticalidad y unilateralidad y apostar a crear espacios y experiencias de comunidad a través de distintos medios y dispositivos para restablecer el vínculo pedagógico. En ello jugarían un papel central los consejos escolares y demás órganos colegiados para que, desde cada escuela, colonia o pueblo, se elijan los contenidos y didácticas acordes a las necesidades de los niños y jóvenes. En suma, restarle protagonismo a la televisión en el proceso de formación es un asunto de imaginación y metodología, pero –sobre todo– de voluntad política de todos y cada uno de los implicados en el sistema educativo nacional.

La pandemia, las co-morbilidades y los riesgos mexicanos ante la junk food.

La alimentación –pese a su carácter consuetudinario y al pasar desapercibida en medio de la cotidianidad de los ciudadanos– no es un tema menor de cara a los múltiples impactos e implacables azotes evidenciados con la pandemia. Particularmente, en una sociedad subdesarrollada como la mexicana, la *crisis epidemiológica global* se traslapa con co-morbilidades que exacerban la exposición y riesgos de los ciudadanos contagiados por el coronavirus SARS-CoV-2. A su vez, esta crisis sanitaria se empalma con las condiciones dadas por la ancestral desigualdad que prevalece en México hasta la actualidad. Y, como se arguyó en otros textos, la pandemia desnudó las miserias y flagelos de la humanidad, al tiempo que radicalizó las condiciones adversas que en México propician y reproducen la exclusión social, el estancamiento económico e incluso las múltiples violencias.

En este escenario, cabe explorar la relación que se gesta entre el padecimiento del Covid-19 y las co-morbilidades (diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, etc.) que lo acompañan.

Cabe puntualizar que no sólo experimentamos una epidemia de desinformación (una *desinfodemia*, como decíamos) sino también una epidemia crónica de junk food o comida chatarra, que invade y contagia mente, hábitos y organismos humanos. La primera capitaliza el miedo y exagera el pánico al calor del *apocalipsis* mediático que se erige en uno más de los dispositivos de control y poder. La segunda modalidad enferma al ser humano y colapsa su funcionamiento orgánico al tiempo que lo expone a una vulnerabilidad fisiológica que debilita su sistema inmunitario de cara a las cada vez más recurrentes epidemias y virus de las últimas décadas.

Si la formación de la cultura ciudadana no se nutre de la espiritualidad, será vaciada de sustancia y deambulará en la simple apariencia. Solo esos referentes éticos profundos atenderán esas otras enfermedades que no son visibles ante nuestros ojos. La pandemia desnudó múltiples riesgos y crisis de distinta índole, pero sin el principio rector de la esperanza -del *pensamiento utópico*, como se mencionó en otro espacio- la humanidad no solo continuará extraviada ideológicamente y mutilada en sus capacidades para imaginar el futuro, sino también vaciada de toda mínima esencia espiritual que le oriente en su pensar, sentir, actuar y proceder.

La alimentación sana y equilibrada es un derecho humano fundamental que, en los hechos y en condiciones de subdesarrollo, es diezmado por el *fundamentalismo de mercado*. Reforzado ello por la preferencia y hábitos del consumidor respecto a un patrón de producción y consumo regido por la celeridad de la urbanización y la mercantilización de un estilo de vida efímero y expuesto al vértigo de la incertidumbre y el desarraigo familiar. Ello en el marco de una voracidad y un afán de lucro y ganancia criminal que no respeta la vida humana en lo más elemental. Desde el glifosato y el uso masivo de plaguicidas e insecticidas hasta la cría y engorde de vacas, pollos y cerdos a través de procesos agroindustriales que aceleran su crecimiento, representan mecanismos de producción que no sólo devastan el medio natural, sino también la salud de los consumidores de productos derivados de la agricultura y ganadería extensivas. Particularmente son nocivas las hormonas que aceleran el crecimiento de estos animales, así como el uso indiscriminado de antibióticos y antivirales ante los cuales se hacen resistentes sus organismos y se tornan proclives a la invasión de patógenos que, posteriormente, son transmitidos al humano.

Por su parte, las bebidas azucaradas causan en una sociedad como la mexicana la muerte de 24 000 personas al año (a nivel mundial la cifra ascendió, durante el 2015, a 184 000 fallecimientos por la misma causa) (<https://bit.ly/3lzbJEW>).

Entre los habitantes menores de 45 años, el 22% de las muertes corresponden a hombres y el 33% a mujeres. Es un problema de ausencia de responsabilidad social por parte de las empresas dedicadas al ramo, pero también fue un problema de política pública a lo largo de las últimas décadas al renunciar el Estado a sus capacidades para conducir la salud pública y atender sus problemáticas. El consumo per cápita de bebidas azucaradas en México es de 170 litros anuales, siendo el más alto del mundo. Abundan mexicanos que consumen hasta dos litros de bebidas azucaradas al día. No menos dramáticas son las dos muertes acaecidas diariamente por padecimientos virales relacionados con la carestía de agua potable en sus localidades. La industria de las bebidas azucaradas tiende a suplantar al Estado, que se torna incapaz en la provisión del vital líquido apto para consumo humano.

Tan sólo en la Ciudad de México, las ventas por comida chatarra alcanzan una cifra de cuatro mil millones de pesos al mes (<https://bit.ly/3bccAXk>). Este negocio es protagonizado por 221 mil establecimientos de distinto tamaño y estos alimentos representan el 60% de sus ventas totales. Es un negocio de amplias magnitudes que, para abarroteras y pequeñas tiendas de la esquina, representa ventas entre los 20 y 40 mil pesos al mes. En general, es un suculento negocio que, para el 2012, ascendía –en todo México– a 28 300 millones de dólares anuales (<https://bit.ly/32IJ2ga>) y que forma parte del mismo andamiaje y de los flujos de inversión extranjera privada suscitados en el seno del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ahora T-MEC).

El consumo de *junk food* (dotada de bebidas azucaradas, grasas saturadas, sales, condimentos, azúcares, saborizantes, conservadores y demás químicos) lleva aparejada la obesidad y el sobrepeso. En México, siete de cada diez habitantes se encuentran en esa condición (en el mundo son 1900 millones de personas) ampliándose con ello su proclividad a experimentar otros padecimientos o enfermedades crónico/degenerativas como la hipertensión, colesterol alto, anemia en mujeres, insuficiencia renal, infartos y diabetes.

Particularmente, son los niños de entre uno y cuatro años los más afectados por la ingesta de comida basura y de bebidas azucaradas. El 83% de estos niños consumen este tipo de bebidas, en tanto que el 64% ingieren botanas o frituras y postres prefabricados; a su vez un 50% recurre con regularidad a los dulces (<https://bit.ly/2DeyxZc>). Expuestos al bombardeo publicitario diario, estos niños perfilan –desde temprana edad– hábitos alimenticios que, pese a su obesidad y sobrepeso, los hunde en la desnutrición y la pobreza infantil. México tiene el deshonroso primer lugar mundial en obesidad infantil y juvenil con, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, un 35% del total de habitantes menores de 12 años en esta condición física.

El *confinamiento global* y el refugio o reclusión de los niños y jóvenes les expone a un mayor sedentarismo y a una seducción y consumo de estos productos saturados en azúcares, grasas y saborizantes artificiales.

Estos fenómenos remiten a un problema de ingresos familiares que tiene sus raíces en la pobreza que ancestralmente vive el país, pero también es un problema cultural, de hábitos inducidos o no, y de preferencias marcadas por la misma convivencia familiar y la trivialización de la vida misma. No menos importante es la falta de orientación y de regulaciones estatales respecto a estos alimentos ultraprocesados. De ahí que el mundo de la junk food sea un territorio de disputas no sólo en torno a un negocio altamente lucrativo, sino también en torno a las significaciones, hábitos y estilos de vida ostentados entre la población ("si el niño es gordo es porque está sano"). De ahí que sea un problema de percepción deformada de la realidad y, por lo tanto, de pautas culturales.

Las invasivas campañas publicitarias que sustentan el mundo de la junk food en México enfatizan en el carácter efímero de la vida y en la relación ficticia del consumo con la felicidad, la diversión y el placer. Y si ello es accesible con facilidad y a un bajo precio, mayor es la seducción para las audiencias. Los mismos cambios en los hábitos de alimentación se relacionan con la imitación del *American way of life* y con el carácter deformado de la vida familiar en el vecino del norte. El mismo sedentarismo y la urbanización, o el hecho constatable de que las familias dejaron de cocinar en casa, aceleran esos cambios. Estos no son temas menores en la comprensión de la epidemia representada por la obesidad y la desnutrición.

Sólo por mencionar un indicador: el consumo de un producto rico en proteína como lo es el frijol, se redujo en México hasta en un 50% durante las últimas tres décadas (de 21 kilos per cápita consumidos se transitó a entre 9 y 11 kilos por persona). Es de destacar que una familia pobre, hacia el año 2014, gastaba alrededor del 30% de su ingreso en comida chatarra vendida en los más de 400 mil pequeños establecimientos comerciales y demás tiendas de ocasión o conveniencia que ofrecen servicio durante las 24 horas del día.

En estas circunstancias, las co-morbilidades aumentan los múltiples impactos de la pandemia y exacerbaban la vulnerabilidad de los individuos enfermos de antemano. Ello, en buena medida, explica que al 28 de agosto y con 63 146 muertes por Covid-19, México ocupe el tercer lugar mundial en este rubro.

Reivindicar el derecho a la alimentación sana y equilibrada es un imperativo fundamental en la era de la pandemia.

Pero ello no se logrará sin soberanía y autosuficiencia alimentarias y sin un rescate de las gastronomías tradicionales de las distintas regiones mexicanas, ricas en maíz, frijol y chile. De ahí la importancia de trascender las ausencias del Estado y de reivindicar su capacidad de regulación frente a una industria de alimentos ultra procesados e hipercalóricos y de bebidas azucaradas que gozó durante décadas del cobijo estatal. De cara al México como reino de la junk food, es necesario anteponer el México de la diversidad cultural, regional y de la cocina tradicional. Si la sociedad mexicana no logra alejar el fantasma de la desnutrición, no habrá vacuna anti Covid-19 que valga. De ahí que la mejor vacuna sea la alimentación sana y una vida alejada del sedentarismo y los hábitos precarios. México no sólo necesita políticas públicas contra el hambre, sino también contra la misma desnutrición y la malnutrición. Sin la escuela como epicentro de reflexión y hábitos sanos, esta labor se torna titánica.

Es de llamar la atención los ejercicios de movilización social protagonizados por comunidades y autoridades oaxaqueñas que, ante la pandemia, prohibieron tajantemente, el acceso y circulación de los distribuidores de comida chatarra y bebidas alcohólicas en sus territorios (<https://bit.ly/3gNFq1h>) al tiempo que se esfuerzan por reivindicar derechos a la alimentación y a la soberanía alimentaria (<https://bit.ly/32HKOhv>).

En suma, la "comida basura o chatarra" al igual que el "veneno embotellado", remiten a un grave problema de salud pública que mantiene en la indefensión a millones de habitantes. Superarlo, marcha a la par de la misma superación de la pobreza, el hambre y de la informalidad laboral, así como del restablecimiento de un Estado con instituciones sólidas que regule el consumo indiscriminado de estos productos y que sea capaz de imponer altas cargas fiscales a los mismos en aras de disuadir su producción y consumo. Sin ánimo de caer en exageraciones, la junk food remite a un problema de vida o muerte, de salud o enfermedad que, en el caso de México, mata a 23 habitantes cada hora (la nación azteca está entre los diez primeros países con muertes relacionadas a la diabetes). La prohibición es un falso debate, no así las regulaciones estrictas y el fomento de un proceso de enseñanza/aprendizaje en torno a una alimentación sana, equilibrada y con altos componentes regionales.

Reflexiones finales: ¿Cómo pensar los impactos de la pandemia?

Estudiar la pandemia como fenómeno inédito no basta con ofrecer una *mirada de brocha gorda* que enfatice en la dinámica y contradicciones estructurales y sistémicas de las sociedades contemporáneas, sino que es preciso ir más allá e interiorizarnos en múltiples referentes empíricos que evidencien las formas en que se manifiesta la crisis epidemiológica global. Enfatizar en las manifestaciones específicas de la pandemia, supone no perder de vista el conjunto y en asumir a la pandemia como un hecho social total dotado de una red de sistemas complejos con interrelaciones estrechas y dinámicas entrelazadas.

Las decisiones y las estrategias adoptadas al calor de *la crisis pandémica*, sea en el sector público o en el ámbito corporativo a lo largo del 2020, inciden en gran parte de la vida social y en las dinámicas cotidianas de la población. Ninguna dimensión de la cuestión social queda al margen, de ahí que sean necesarias miradas múltiples y entrecruzadas que faciliten construir nuevo conocimiento dotado de pensamiento estratégico para incidir en las renovadas formas en que se tomarán las decisiones y en las nuevas funciones del Estado. Más importante resulta este ejercicio de cara a las especificidades de las sociedades subdesarrolladas y a la exacerbación de los problemas públicos ancestrales ante el maremágnum de la pandemia.

Se necesitan referencias empíricas que enfatizen en esos rasgos sui géneris, pero también dotarnos de conceptos y categorías nuevos que puntualicen en la condición inédita de la realidad social contemporánea. Además, se precisa de un diálogo interdisciplinario y de dotarnos de herramientas analíticas provenientes del pensamiento anticipatorio para posicionar la mirada en los múltiples escenarios que se configuran a raíz de la *crisis epidemiológica global*, la correlación de fuerzas al interior de las sociedades nacionales y las transformaciones en las relaciones económicas y políticas internacionales. En suma, ante la ruptura histórica que impone la gran reclusión, es necesario –desde las ciencias sociales– enfrentar la ruptura epistemológica y la erosión de los referentes teóricos para trascender a la construcción de nuevas significaciones de cara a la *tergiversación semántica* y la reconfiguración del miedo como política del nuevo Estado.



CEEYPP

CENTRO DE ESTUDIOS EN
ESTRATEGIA Y POLÍTICAS
PÚBLICAS

Dr. Isaac Enríquez Pérez

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM

CEEYPP - Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas

info@ceeypp.org